

Official

— Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, 3 nuevos.
— Números sueltos, 150 milésimas.

Art. 102. Con objeto de que no puedan suscitarse obstáculos á las comisiones, delegados especiales ó dependientes de la Administración en el desempeño de las funciones que se les hayan encomendado, la Dirección general de Contribuciones, ó los Jefes económicos en su respectivo caso, les proveerán de certificados en que conste hallarse exonerados.

de llevar á efecto la comprobación administrativa en toda una provincia, en los pueblos de un partido judicial ó administrativo, ó en una localidad determinada; y con presentación de dicho documento podrán reclamar los auxilios necesarios de las Autoridades locales respectivas.

Art. 103. Cuando la comprobación administrativa deba verificarse en establecimientos fabriles ó comerciales, ó en casas particulares cuyos dueños hayan consentido la entrada en su respectivo domicilio, al presentar las declaraciones de que trata el artículo 11, 12, 13 y 21 de este Reglamento, los Jefes de la Administración económica lo harán así constar por medio de otra certificación, que también expedirán y entregarán á los comisionados, delegados especiales ó empleados á quienes se refiere el artículo anterior, á no ser que dichas declaraciones se hallen unidas á los expedientes de comprobación iniciados que aquellos deban continuar.

Siempre que en una ó en otra forma de las expresadas en el párrafo anterior conste la conformidad del interesado, los representantes de la Administración económica podrán proceder desde luego á verificar la comprobación, con tal que sea de día, en el establecimiento fabril ó comercial ó en la casa particular de que se trate, sin que en tales casos pueda en manera alguna imputárseles allanamiento de domicilio.

Art. 104. Si no obstante haber dado el consentimiento que expresa el artículo precedente el dueño ó encargado de un establecimiento fabril ó comercial negase al agente administrativo encargado de hacer la comprobación su entrada en la fábrica, talleres, almacenes etc., dicho agente le notificará por escrito á presencia de dos testigos la facultad de que se halla revestido y el consentimiento prestado para ejecutar la investigación, y le exigirá que firme la notificación, haciéndolo en su defecto dos testigos; y en el caso de persistir en la negativa, acudirá el agente acto continuo al Juez de paz respectivo, exhibiéndole el documento de que trata el artículo anterior y la diligencia de notificación, en cuya vista concederá el Juez de paz, sin excusa alguna, autorización para que el agente administrativo pueda entrar de día á desempeñar su cometido en el local ó locales en que se ejerza la industria de cuya comprobación se trate, impetrando si fuere necesario el auxilio del Alcalde popular para vencer toda clase de resistencia.

Art. 105. Si habiéndose llenado los requisitos prevenidos en los dos artículos anteriores negase el Juez de paz la autorización solicitada, el representante de la Administración acudirá inmediatamente al Juez de primera instancia del partido, por quien será otorgada dicha autorización dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Al mismo tiempo el representante ó delegado de la Administración dará cuenta de lo ocurrido al Jefe económico de la provincia para que pueda ponerlo en conocimiento del Fiscal de la Audiencia del territorio á fin de exigir al Juez de paz la responsabilidad á que haya lugar, y en su caso la indemnización de los daños que por su desobediencia haya experimentado el Tesoro público.

De la misma manera se procederá respecto del Juez de primera instancia cuando por su parte incurra en alguna responsabilidad exigible con arreglo á las leyes.

Art. 106. Cuando no exista permiso previo del dueño ó encargado del establecimiento ó local en que la comprobación deba verificarse, el agente administrativo tendrá en cuenta la forma en que se ejerza la industria y los signos externos que lo demuestren.

Si se trata, por ejemplo, de un almacén, tienda, obrador etc. abierto para

la venta al público, cuyo dueño no estuviese inscrito en matrícula, ó que lo haya sido en clase inferior á la que le corresponda, el citado agente, sin necesidad de entrar en el local respectivo, extenderá diligencia á presencia de dos testigos cuando menos que la firmarán con él, consignando detalladamente los signos externos á que alude el párrafo anterior, ó sea la naturaleza de la industria, la forma en que se ejerza, los géneros ó efectos que se vendan ó construyan; si se expendan al por mayor ó al por menor, si se hallan expuestos al público, y si el local tiene muestra, plaza ó de cualquiera otro modo se manifiesta la existencia de la industria y la manera de ejercerla.

Si el industrial ha hecho insertar anuncios en los periódicos, dirigido circulares ó repartido prospectos relativos á su industria, se unirá á la diligencia un ejemplar de ellos siempre que sea posible adquirirle.

Si con los datos mencionados se demuestra el ejercicio fraudulento de la industria, el agente administrativo, notificará al interesado que comienza el expediente de defraudación y que puede exponer en su descargo lo que tenga por conveniente. La contestación se insertará en la diligencia de notificación, firmándola esta el interesado ó dos testigos cuando no sepa ó no quiera hacerlo.

En el caso de que el resultado de la primera diligencia no sea suficiente para formar cabal juicio, como de todos modos existirá la sospecha racional del ejercicio fraudulento de una industria, el agente administrativo, con exhibición del documento expresado en el art. 102 y de la diligencia practicada, solicitará del Juez de paz autorización para entrar en el establecimiento ó local respectivo para depurar los hechos, y si no la concediere se procederá á lo que determina el art. 105.

Art. 107. Si la comprobación administrativa deba verificarse en una fábrica, obrador ó escritorio situado en el interior de un edificio ó en los pisos superiores del mismo, sin que existan los signos exteriores expresados en el artículo anterior, el agente administrativo procurará adquirir cuantos datos sea posible de las personas que concurren al edificio, de los vecinos inmediatos ó de quien pueda suministrarle la justificación de la existencia de la profesión ó industria sin estar matriculada, y lo consignará también por diligencia con asistencia de dos ó mas testigos, pidiendo entonces permiso para entrar en el local respectivo al dueño ó encargado de este. Si se le negase, solicitará la autorización del Juez de paz en la forma expresada en el artículo anterior; y si tampoco se la concediese, acudirá al Juez de primera instancia según determina el art. 105, procediéndose en su caso á lo demás que correspondiere conforme á lo establecido en el mismo.

Art. 108. Al resolver los expedientes de defraudación de que trata el capítulo siguiente se considerará como circunstancia agravante la de haber negado un industrial, sin fundado motivo, permiso para entrar en su domicilio con objeto de verificar la comprobación administrativa cuando se presenten á ejecutarla de día los representantes de la Administración debidamente autorizados.

Art. 109. Los Alcaldes populares prestarán por su parte á las comisiones, delegados especiales ó empleados públicos encargados de la comprobación administrativa los auxilios necesarios para el cumplimiento de su cometido, y les facilitarán asimismo cuando lo reclamen el examen de la matrícula de la localidad, con los antecedentes y datos en que se funde.

Art. 110. Los Jefes económicos de la Administración y los representantes de ésta, al instruir los expedientes de comprobación administrativa, tendrán en

cuenta que no deben confundir los hechos aislados relativos á una profesión ó industria con el ejercicio habitual de ella, pero consignarán todos los que consten ó puedan justificarse referentes al caso de que se trate y sean conducentes á formar cabal juicio sobre el mismo, utilizando, siempre que sea posible, la declaración de otros industriales del gremio, ó de los que careciendo de esta cualidad sean vecinos inmediatos de aquel á quien la investigación se refiera.

Art. 111. Los mismos Jefes podrán reclamar á los Alcaldes de los pueblos de la provincia y á los Administradores de las demas los datos que conduzcan á la justificación de los hechos, y unos y otros tendrán el deber de facilitarlos.

Igual reclamación podrán hacer por sí ó por conducto de la Dirección general de Contribuciones á todas las Autoridades superiores, quienes no podrán excusarse de evacuar los informes que se les pidan, ni dejar de facilitar los datos que se les reclamen con la exactitud y puntualidad que exige el servicio público.

Art. 112. Cuando los expedientes tengan solo el objeto de comprobar la exacta clasificación de un industrial, se practicarán únicamente las actuaciones que conduzcan á fijar la naturaleza ó importancia de la industria de que se trate, pero se consignarán siempre las explicaciones que por escrito ó de palabra dé el interesado.

Si resultase justificado que la clasificación está mal hecha por error disculpable ó por duda racional, el Jefe de la Administración económica, oyendo á la Sección de Contribuciones y al Oficial letrado, se limitará á determinar la tarifa, clase y concepto por que deba contribuir el industrial, á quien se notificará el acuerdo en la forma prevenida en este reglamento.

Art. 113. Dentro de los ocho días siguientes al de la notificación podrá el interesado apelar ante la Junta administrativa de la provincia, observándose en el caso de interponerse el recurso, lo prevenido sobre la presentación y admisión de éste en los artículos 82 y 83.

Art. 114. La Junta administrativa, á la que se remitirá el expediente original, le resolverá en un plazo que no excederá de ocho días.

Si la resolución es confirmatoria del acuerdo aplazado, no cabrá contra ella recurso ulterior, y aquel se llevará inmediatamente á ejecución.

Si fuere revocatoria, podrá el interesado apelar ante el Ministerio de Hacienda dentro del plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación.

La resolución que dicte el Ministerio de Hacienda, á propuesta de la Dirección general de Contribuciones, y cuando lo estime conveniente oyendo al Consejo de Estado, será firme, y contra ella no podrá establecerse ningún recurso.

Art. 115. Siempre que de un expediente de comprobación administrativa resulte que en la clasificación no medió error ni duda racional, sino intención manifiesta de defraudar al Tesoro por haber ocultado el industrial en su declaración hechos ó datos relativos á la industria que ejerce para disminuir la importancia de ésta; ó que se ejerza una profesión ó industria cualquiera sin estar incluido en la matrícula que corresponde, ó sin haberse previsto el industrial del documento de que trata el art. 22, se continuará las actuaciones del expediente con sujeción á lo establecido en el capítulo que sigue para los casos de defraudación.

CAPITULO VII.

DE LA DEFRAUDACION

Sección 1.ª

Disposiciones preliminares.

Art. 116. Para celebrar juicios de conciliación e introducir cualquiera demanda ante los Tribunales y Juzgados será requisito indispensable en el demandante, si

se halla sujeto á la contribución industrial y la acción que ejercita tiene relación con la profesión, arte ú oficio que ejerza, justificar por medio del recibo talonario de la recaudación, ó de certificación del Jefe económico de la provincia, que está corriente en el pago de la cuota que se le haya impuesto, ó que ha obtenido la declaración de exención que establece el artículo 16, bajo la responsabilidad personal de los Jueces, Secretarios y Escribanos que permitan la celebración del juicio de conciliación ó admitan la demanda sin que preceda la justificación indicada.

Art. 117. Los Abogados, Procuradores y todos los dependientes de los Tribunales y Juzgados sujetos á la misma contribución, al comenzar el ejercicio de su respectivo cargo, y sucesivamente al principio de cada año económico, están también obligados á justificar por medio de cualquiera de los documentos expresados en el artículo anterior que se hallan corrientes en el pago de la contribución.

Art. 118. Igual obligación tendrá todo el que, por razón de una profesión ó cargo público sujeto al pago del impuesto, gestione por sí ó en representación de un tercero ante las oficinas del Estado y las provinciales ó municipales.

Art. 119. Toda declaración de defraudación hecha por Autoridad competente lleve consigo la prohibición absoluta de continuar en el ejercicio de la industria á que la declaración se refiera mientras no se pague las cuotas devengadas y los recargos impuestos, ó se consigne el importe de unos y otros en las Cajas del Tesoro.

Sección 2.ª

De los casos de defraudación.

Art. 120. Son defraudadores de la contribución industrial y de comercio:

1.ª Los que ejerzan cualquiera profesión, industria, comercio, arte ú oficio de los sujetos á la misma sin haber presentado previamente la declaración duplicada que previenen los arts. 11, 12, 13 y 21 de este reglamento.

2.ª Los que en las declaraciones ó documentos presentados cometan falsedad ó cualquiera inexactitud manifiesta con el objeto de disminuir la importancia de la industria y obtener con ella una clasificación inferior á la que corresponda, sin perjuicio del procedimiento criminal si á él hubiere lugar con arreglo á derecho.

3.ª Los que hallándose matriculados en una clase se hayan dedicado al ejercicio de cualquiera profesión ó industria de clase superior sin haber presentado previamente la declaración duplicada en que conste el cambio.

4.ª Los que se establezcan en distinta población de aquella en que se hallen matriculados sin presentar á la Administración ó al Alcalde respectivo la declaración duplicada que corresponde para ser comprendidos en la matrícula de la nueva localidad, y satisfacer la diferencia de cuota si á ello hubiere lugar.

5.ª Toda persona que ejerza una industria comprendida en la tarifa de Patentes sin haber satisfecho previamente la cuota señalada en la misma, acreditándolo con la presentación del recibo talonario de certificación de que trata el artículo 22 y 28 de este reglamento.

Y 6.ª Todo funcionario público de cualquiera clase y categoría que, contraviniendo á las prescripciones de los artículos 41, 42, 46, 49 y 102 de este reglamento, dé con sus actos motivo á que se cumpla defraudación.

Sección 3.ª

De la tramitación de los expedientes sobre defraudación.

Art. 121. Los expedientes que se instruyan sobre defraudación constarán:

1.ª De las actuaciones practicadas en cualquiera comprobación administrativa, si por el resultado de ellas operecase defraudación.

2.º De la denuncia particular, y de la denuncia en virtud de la cual se forme el expediente, si no hubiere precedido el de comprobación administrativa.

3.º De la diligencia de reconocimiento de la casa, fábrica, establecimiento &c. practicado por el funcionario público encargado de la formación del expediente, previos los requisitos establecidos en el capítulo anterior; en cuya diligencia se expresará clara, explícita y detalladamente la profesión, industria, arte u oficio de que se trate o los artículos que sean objeto de la venta, y el modo habitual de expendarlos, o los aparatos y objetos impondibles si la diligencia se refiere a establecimientos fabriles.

Esta diligencia se autorizará por el empleado que la practique y el interesado, o por dos testigos cuando aquel no sepa o no quiera firmar.

4.º De otra diligencia en que se hará constar, según determinen el art. 106, lo que el interesado exponga en su defensa, o que, requerido al efecto, renuncie a usar de este derecho. La diligencia será también autorizada en igual forma que la anterior.

5.º De los demás datos y antecedentes que puedan adquirirse y conducirse al esclarecimiento del hecho que se trate de averiguar.

Art. 122. En el expediente se hará constar también por el funcionario que le instruya, o en su caso por el Jefe de la Administración económica, si el interesado es o no reincidente en la defraudación.

Art. 123. Si en la diligencia de que trata el párrafo cuarto del art. 121 hiciera el interesado alguna cita, se evacuará inmediatamente si la persona citada reside en la misma población; y en otro caso se dará cuenta al Jefe de la Administración económica para que pueda acordar que se verifique ante el Alcalde popular respectivo.

Art. 124. Cuando el expediente se ha terminado y en disposición de remitirse al Jefe de la Administración económica, se notificará al interesado, haciéndole constar en el expediente por medio de diligencia que firmará el mismo, o su defecto dos testigos.

Art. 125. Dentro del plazo de ocho días, contado desde el siguiente al de la notificación, podrá el interesado acudir a la Administración económica provincial haciendo las observaciones que tenga por convenientes a su defensa.

Art. 126. El funcionario que haya intervenido en el expediente extinguido, a continuación de la diligencia de que trata el art. 124, un informe razonado sobre los hechos, proponiendo la imposición de la responsabilidad o responsabilidad en que, a su juicio, haya incurrido el contribuyente o contribuyentes comprendidos en aquel, y citando el artículo o artículos de este Reglamento en que se fonde la propuesta.

Art. 127. La entrega del expediente al Jefe de la Administración económica se verificará precisamente dentro de ocho días siguientes a la extensión de la diligencia de que trata el artículo 124, dándose al funcionario que haya formado el expediente recibo de entrega.

Art. 128. Es aplicable a estos expedientes, en cuanto a ellos tiene relación, lo dispuesto en el art. 83 de este Reglamento.

Art. 129. El Jefe de la Administración económica provincial acordará el porqué de la denuncia particular, dentro de un plazo que no excederá de ocho días, a la denuncia de aquel si hubiere duda sobre la veracidad de los hechos.

En el informe, y leonado además, presentará el expediente por el interesado, si este lo solicita, el derecho que le concede el artículo 124, proponiendo a la Junta administrativa la declaración que corresponde respecto a la industria, comercio &c. en que deba ser aquel matriculado; la cuota o cuotas que deba satisfacer, y el recargo que se haya hecho acreedor, citando el

artículo o artículos de este Reglamento y la tarifa y conceptos en que fonde su propuesta.

Art. 130. Si la Sección no considera procedente la imposición del recargo, expone también las razones en que se fonde; y en este caso practicará la liquidación de las cuotas del Tesoro con el aumento que establece el art. 5.º y el 6.º por 100 por razón de mora.

Art. 131. Por ningún motivo se detendrá o paralizará el curso y tramitación de estos expedientes, siendo responsable el Jefe de la Administración económica de toda retrasación, injustificada, que en su despacho y tramitación se advierta, y de que una vez terminada la instrucción no se dé cuenta a la Junta administrativa dentro del plazo de ocho días.

Art. 132. La Junta podrá acordar, cuando se le ofrezca alguna duda, que se evacúe o amplíe cualquiera diligencia que estime necesaria para desvanecerla.

Sección 4.º

De la penalidad.

Art. 133. Se impondrá a toda persona comprendida en los párrafos 1.º y 3.º del artículo 120:

1.º El pago de las cuotas que hubiere debido satisfacer en los dos años anteriores al que haya sido descubierto el ejercicio fraudulento de la industria, si se justificase que con efecto existió durante aquel tiempo, o por el menor que a probata correspondiera según el que conste haber durado aquel ejercicio; y

2.º Un recargo equivalente al total importe de la cuota de tarifa que por un año correspondiera a la industria o industrias de cuyo ejercicio se trate.

Art. 134. Se impondrá a los comprendidos en el párrafo 2.º del mismo artículo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal si esta procediere con arreglo a derecho:

1.º El pago de la diferencia de cuota que hubieren dejado de satisfacer, limitado a los dos años de que trata el artículo anterior, o al tiempo menor que correspondiere.

2.º Un recargo equivalente al importe de la diferencia de cuota de tarifa que por un año correspondiera a la industria o industrias de que se trate.

Art. 135. La misma pena, pero sin haber lugar a ningún otro procedimiento, se impondrá a los industriales que cometan defraudación en la forma que expresan los párrafos 3.º y 4.º de mencionado artículo.

Art. 136. Los funcionarios públicos de todas clases comprendidos en el párrafo 6.º del propio artículo satisfarán también un recargo equivalente a los dos tercios partes del que se haya impuesto o correspondiere imponer a los defraudadores respectivos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que pueda exigirseles por los Tribunales competentes en el caso de haber cometido cualquiera delito o falta de los previstos en el Código penal.

Art. 137. Los contribuyentes a quienes se refiera el art. 104 de este Reglamento, que sin fundado motivo hayan opuesto resistencia a la entrada en su respectivo domicilio para llevar a efecto una comprobación administrativa, y los que también relucientes en la defraudación, sean recargados con el doble de las cantidades determinadas en los artículos anteriores para los diferentes casos que correspondieren.

Art. 138. La imposición y pago de los recargos recae a los contribuyentes del 6.º por 100 que por razón de mora corresponden al Tesoro sobre las cantidades no satisfechas en tiempo oportuno; pero se hará efectivo dicho 6.º por 100 en los casos de absolución o condonación de los recargos, siempre que se declare al contribuyente responsable al pago de la cuota.

Art. 139. Los industriales contra quienes no haya comenzado a instruirse expediente de defraudación que se denun-

cién a sí mismos quedarán por este acto relevados de la imposición de recargos, y obligados solamente a satisfacer la cuota que les corresponda según la clase e importancia de la industria o industrias que ejerzan, el aumento establecido por el artículo 5.º y el 6.º por 100 por razón de mora.

Art. 140. Cuando las Juntas administrativas encuentren arreglada la propuesta de la Sección por el resultado de los expedientes o por las diligencias que hayan mandado practicar, dictarán su resolución, determinando en ella la clase de industria, arte u oficio, tarifa y concepto por que el interesado deba contribuir, la cuota o cuotas que ha de satisfacer y el importe del recargo en que haya incurrido.

Si por resultado del mismo expediente considerase la Junta que no procede la imposición del recargo propuesto, lo declarará así, expresando los fundamentos de la resolución.

En uno u en otro caso pasará el expediente a la Administración económica para que tome conocimiento de lo acordado.

Art. 141. La resolución de la Junta quedará estada, y solo será reclamable ante el Tribunal contencioso-administrativo del territorio.

El recurso deberá en su caso entablarse por el interesado dentro del plazo de 30 días, contado desde el siguiente al de la notificación.

Art. 142. Para que los particulares puedan entablar la vía contencioso-administrativa, deberán consignar en la Caja del Tesoro el importe de las costas y recargos, o acreditar su pago a satisfacción de la Administración económica, sin cuyo requisito no será admitida la apelación.

Art. 143. Pasado el término de los 30 días sin haberse hecho la consignación o el abono, el expediente se procederá a la exacción de las cuotas y recargos, empleando, si fuese necesario, los medios coercitivos establecidos en la instrucción de 3 de diciembre de 1869.

Art. 144. Cuando las resoluciones de la Junta administrativa sean absolutorias cesarán también estadas; pero el Jefe de la Administración económica, dentro del improrrogable plazo de ocho días, remitirá el expediente a la Dirección general de Contribuciones.

Esta centro acordará en el término de los dos meses siguientes si la Administración debe o no acudir a la vía contenciosa; y en caso afirmativo comunicará orden para que la verifique el oficial letrado dentro de los 30 días siguientes.

El recurso lo formulará ante el Jefe de la Administración económica, por quien se remitirá inmediatamente, con el expediente original, el Presidente del Tribunal contencioso-administrativo.

Art. 145. Cuando los interesados acudan ante el Tribunal contencioso-administrativo reclamando contra los acuerdos dictados por las Juntas, se parará a las mismas las expedientes instruidos, anotando en el libro de registro la salida con la especificación necesaria.

Art. 146. La sustanciación de estos juicios ante los Tribunales contencioso-administrativo será la que se halla establecida o se establezca en lo sucesivo para los negocios contenciosos de la Administración, a quien representarán los funcionarios de que trata el art. 89 de este Reglamento.

Art. 147. Cuando los expedientes de defraudación se hayan instruido en virtud de denuncia particular, tendrá el que la haya presentado derecho a percibir del Tesoro el importe de las dos terceras partes del recargo o recargos que como pena de la defraudación se hayan impuesto y exigido al defraudador.

Art. 148. Corresponde exclusivamente al Gobierno la facultad de condonar dichos recargos; pero de la condonación se excusará siempre la parte correspondiente al denunciador o al Agente de la Admini-

nistración que por gestión propia descubrió la defraudación.

CAPITULO VIII.

Sección 1.ª

De la administración del impuesto.

Art. 149. La gestión de este impuesto estará a cargo de la Dirección general de Contribuciones, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, a quien corresponde la administración de todos los ramos de la Hacienda pública; y sin perjuicio de lo demás establecido en este Reglamento, tendrá los deberes y atribuciones especiales siguientes:

1.º Resolver las dudas o consultas de los Jefes económicos de la Administración provincial sobre aplicación de las disposiciones de este Reglamento cuando no se trate de su interpretación o aclaración; y en este caso proponer al Ministerio de Hacienda lo que proceda.

2.º Resolver igualmente los expedientes a que se refiere el art. 2.º, sin perjuicio del recurso de alzada a que los interesados podrán recurrir en su caso.

3.º Preponer al Ministerio de Hacienda, si lo estima necesario, el nombramiento de visitas, comisiones o delegados especiales en los casos de que trata el artículo 5.º y 101.

4.º Acopiar anualmente, y en cualquiera época que lo considere necesario, las disposiciones convenientes, para que los registros y matriculas se formen con sujeción a las reglas establecidas y dentro de los plazos señalados para la buena ejecución de todos los demás servicios relativos al impuesto, y para el aumento de los valores de este, su recaudación íntegra y el puntual ingreso en las Cajas del Tesoro.

5.º Cuidar de que los Jefes económicos y demás funcionarios de la Administración provincial llenen con exactitud sus respectivas obligaciones, exigiendo la responsabilidad al que las descuide o cometa faltas perjudiciales al servicio, y proponiendo al Ministerio de Hacienda lo que proceda cuando la corrección de aquellos no esté en sus atribuciones.

Art. 150. La Administración del impuesto en las provincias corresponde a los Jefes económicos de las mismas, bajo la inmediata dependencia de la Dirección general de Contribuciones. En su consecuencia, además de lo que, en términos generales se establece en este Reglamento, tienen dichos Jefes los deberes y atribuciones siguientes:

1.º Cuidar de que se formen con la anticipación necesaria por la Sección de Contribuciones los registros de industriales que ordena el artículo 51.

2.º Presidir las reuniones de los gremios y los de los industriales pertenecientes a las clases no gremiales en los casos que determina este Reglamento.

3.º Nombrar la tercera parte de los clasificadores de los mismos gremios y la totalidad cuando aquellos no ejecuten el nombramiento según establece el art. 58.

4.º Hacer el repartimiento gremial en el caso previsto por el art. 69.

5.º Formar la matrícula correspondiente a las capitales de provincia, y aprobar cuando proceda todas las demás.

6.º Resolver en primera instancia los expedientes de amación, fijando la cuota provincial que deba satisfacerse; los que se instruyan con motivo de las declaraciones que presenten los industriales a que se refieren los artículos 12 y 13; los de comprobación administrativa que tengan por objeto clasificar una industria, y todos los de altas y bajas y de partidos leales, después de haberse llenado en cada uno de ellos los formalidades prevenidas en este Reglamento.

7.º Manifestar en los casos previstos por el mismo la conveniencia de establecer comisiones de visita o de acopiar delegados especiales.

(Se continuará.)

ANUNCIOS OFICIALES.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

En virtud de lo dispuesto por orden de 6 de julio de 1869, esta Direccion general ha señalado el día 10 del próximo mes de mayo a la una de su tarde para la adjudicacion en publica subasta de las obras que faltan en la carretera de Ponferrada a Orense, y parte comprendida entre el Puente de las Tablas y el Páramo del Rodicio, cuyo presupuesto es de 106.487 escudos 852 milésimas.

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la instruccion de 18 de marzo de 1852, en esta corte ante la Direccion general de Obras públicas, situada en el local que ocupa el Ministerio de Fomento, y en Orense ante el Gobernador de la provincia; hallándose en ambos puntos de manifiesto, para conocimiento del público, el presupuesto, condiciones y planos correspondientes.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglándose exactamente al adjunto modelo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como garantía para tomar parte en esta subasta será de 5.000 escudos en dinero ó acciones de caminos, ó bien en efectos de la Deuda pública al tipo que les está asignada por las respectivas disposiciones vigentes, y en los que no lo tuvieron al de su cotizacion en la Bolsa el día anterior al fijado para la subasta: debiendo acompañarse a cada pliego el documento que acredite haber realizado el depósito del modo que previene la referida instruccion.

En el caso de que resultasen dos ó mas proposiciones iguales se celebrará únicamente entre sus autores, una segunda licitacion abierta en los términos prescritos por la citada instruccion; siendo la primera mejora por lo menos de 100 escudos, quedando las demas á voluntad de los licitadores, siempre que no bajen de 40 escudos.

Madrid 31 de marzo de 1870.—El Director general de Obras públicas, Saavedra.

Modelo de proposicion.

D. N. N., vecino de..., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion en pública subasta de las obras de terminacion de la carretera de Ponferrada a Orense y parte comprendida entre el Puente de las Tablas y el Páramo del Rodicio, se comprometo á tomar á su cargo la construccion de las mismas, con sujecion á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de... (Aquí la proposicion que se haga, admitiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipo fijado pero advirtiendo que será desahuciada toda propuesta en que no se exprese determinadamente la cantidad en escudos y milésimas escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecucion de las obras.)

Fecha y firma del proponente.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

La Direccion general del Tesoro público en comunicacion fecha 2 del actual participa á esta Administracion económica que en el sorteo celebrado el mismo día para adjudicar el premio de 250 escudos concedido en cada uno á las huérfanas de militares y patriotas muertos en campaña, ha cabido en suerte dicho premio á D.^a Ramona Mateo, hija de Don Manuel, miliciano nacional de Montero, muerto en el campo del honor.

Lo que se hace público por medio de este anuncio para que llegue á noticia de la interesada.

Orense 8 de abril de 1870.—Francisco Criado Perez.

Ayuntamiento de la Arnoya.

Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 162 de la ley municipal vigente se hallan expuestas al público en la secretaría de esta corporacion las cuentas de gastos municipales de este distrito de los años de 1862 y siguientes hasta el económico de 1868 á 69 inclusive, para que los vecinos puedan hacer las observaciones y exámen que quieran durante el término de quince días que prescribe la ley.

Arnoya 6 de abril de 1870.—El alcalde 1.^o presidente, José Viso y Sanchez.

Ayuntamiento de Baltar.

Se hace saber á todos los vecinos y forasteros que oigan contribucion territorial en este distrito municipal, prevalecen en la secretaría de este ayuntamiento dentro del plazo preciso de veinte días, contados desde la insercion de este anuncio en el periódico oficial de esta provincia, las notas de alteraciones que hubiese en su riqueza imposible para proceder en su vista á la rectificacion del padron que ha de servir de base para el repartimiento de la misma en el año económico de 1870 á 71; apercibidos de que pasado el plazo prejuzgado, no serán oídos.

Baltar abril 6 de 1870.—El alcalde, Fernando Enriquez.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

D. Santiago Martinez, juez de primera instancia de Carballino.

Se anuncia por segunda vez el fallecimiento abintestado de D. Fr. Nicolás Molino, párroco que fué de San Matías de Moñes, á fin de que en el término de veinte días, contados desde la insercion de este edicto en la Gaceta oficial, los señores que se crean con derecho á su sucesion, vengán á ejercitarlo en este juzgado por virtud del juicio pendiente sobre el particular.

Dado en Carballino á 6 de abril de 1870.—Santiago Martinez.—El actuario, Ceferino M. Romes.

D. Ricardo Labaca, juez de paz de esta capital é interino de primera instancia de la misma.

Por el presente se cita, llama y emplaza á Antonia Domínguez Castro, natural de Pontevedra, vecina de esta ciudad,

dedicada á la prostitucion, á fin de que dentro del término de treinta días se presente en este juzgado á ser indagada en la causa que contra ella se instruye por hurto de ropas, encargando á las autoridades civiles y militares procedan á su captura y remision á este mi juzgado.

Dado en la Coruña á 5 de abril de 1870.—Ricardo Labaca.—Por su mandado, Eugenio Maria Mallo.

D. Manuel Fernandez Bastos, juez de primera instancia de la ciudad de Orense y su partido.

Hago saber que en esta juzgado se sustancia expediente de abintestado, de Pedro de Cabo Gil, soltero, hijo de Antonio y Carmen, natural de Moreiras, alcaidia de Toén, partido judicial de esta ciudad, fallecido en el Hospital de Santa Cruz de Barcelona en 22 de agosto de 1866, premovido dicho expediente por el procurador D. Bernardo Maria Pedrayo á nombre de Salvador de Cabo Gil, vecino de San Juan de Barbadiana, como único heredero y heredero del Pedro. A petición del referido procurador, he acordado llamar por segunda edicto á todos los que se crean con derecho á la herencia del Pedro Cabo Gil, para que lo verifiquen por la escribanía del que autoriza dentro del término de veinte días; pues que pasado sin verificarlo, les parará el perjuicio que haya lugar, dándose al expediente el curso que correspondiere.

Dado en Orense á 5 de abril de 1870.—Manuel Fernandez Bastos.—De su orden, Modesto Morais Perez.

D. Ramon Rodriguez Valciras, juez de primera instancia de Vivero y su partido etc.

Por el presente y término de veinte días, á contar desde el en que tenga lugar la insercion del actual en el Boletín oficial de esta provincia de Lugo, se llama, cita y emplaza á Manuela Diaz, mujer de José Fernandez, vecina del Pósito de Fonte Ceba, parroquia de Santa Maria del Campo de este pueblo, de edad 32 años, estatura pequeña, cara redonda, pelo y ojos color negro, ojos tambien negros, boca y nariz regular, color bueno, sin otras particularidades, constituido en testigo en un parrullo á la cabeza colocado á la vizcaina color encarnado con flores blancas y algunos agujeros, en un desgar de pelo encarnado virje, en una chaqueta de bayeta negra rosa en sus mangas, en una saya de estopa y lana del país color castaño oscuro, en un mandil de lo mismo castaño claro y en otro mandil de igual género y color sobre los hombros, cuya mujer ha desaparecido de su casa viéndose á vender un haz de paja de centeno á esta villa la mañana del 1.^o del que rige, con el fin de que se presente en este juzgado por la escribanía del que da fe á responder á los cargos que le resultan por tal desaparicion en la causa que con tal motivo estoy instruyendo; advertida de que si así no lo hace, le parará el perjuicio que haya lugar, segun así lo he acordado por auto de ayer.

Dado en Vivero á 6 de abril de 1870.—Ramon Rodriguez Valciras.—De su mandato, Manuel Tojo-Montenegro.

D. José Bermudez Cadron, juez de primera instancia de la ciudad de Lugo y su partido.

Por el presente se ruega á todas las autoridades, así civiles como militares, que por todos los medios que se sean capaces sugiera su celo y requiera al caso presente, procedan á la captura y remision á este juzgado con las seguridades debidas, de Domingo Soutullo Paz, reo de homicidio, fugado anteriormente del presidio de Ceuta, y al amanecer de 1.^o del corriente de la cárcel de Guitiriz, cuyas señas personales á continuacion se expresan, que pasaba condujido desde Pontevedra á disposicion del señor gobernador de Cádiz. Al efecto, en nombre de S. A. el Regente del Reino, los exorto en forma, ofreciéndoles la reciproca en casos análogos.

Dado en la ciudad de Lugo á 4 de abril de 1870.—José Bermudez Cadron.—Por mandato de S. S., Benito Rodriguez.

Señas del fugado.

Edad 38 años, estatura mas de 5 pies, color triguño, cara larga, nariz aplada, ojos negros, barba toda ella y larga, color negro, cabeza algo calva, expresion portuguesa cerrada, sin embargo de verse en conocimiento de ser su primitiva edencion gallega; vestia pantalón y chaleco de tela imitante á paño, chaqueta ó zamarra de astracán color negro.

ANUNCIOS NO OFICIALES.

AYUNTAMIENTO POPULAR DE MADRID.

De las partes remitidas en el día de hoy por la Intervencion del mercado de fincas y nota de precios de artículos de consumo, resulta lo siguiente:

PRECIOS DE ARTICULOS AL POR MAYOR Y MENOR.

Carnado vaca, de 4.400 á 4.800 escudos arroba, y de 0.185 á 0.212 escudos libra.

Idem de vacuno, de 0.185 á 0.212 escudos libra.

Idem de ternero, de 0.400 á 0.500 escudos libra.

Ternero asado, de 8.300 á 8.400 escudos arroba, y de 0.370 á 0.394 escudos libra.

Idem fresco, de 0.312 á 0.330 escudos libra.

Lamón, de 0.500 á 0.600 escudos libra.

Vino, de 1.600 á 2.800 escudos arroba, y de 0.048 á 0.118 escudos cuartillo.

Pan de dos libras, de 0.118 á 0.141 escudos.

Ajoz, de 2.600 á 2.800 escudos arroba, y de 0.118 á 0.130 escudos libra.

PRECIO DE GRANOS EN EL MERCADO DE AYER.

Cebada, de 1.650 á 1.900 escudos fanega.

Trigo vendido, 1.080 fanegas.

Precio medio, 4.413 escudos.

NOTA.—Reses degolladas ayer:

121 vacas, que hacen 52.866 libras de peso.

311 carneros, que hacen 7.087 idem.

125 corderos, que hacen 2.248 idem.

187 cerdos, que hacen 43.059 idem.

136 corderos lechales.

91 terneras.

70 cabritos.

Lo que se anuncia al público para su inteligencia.

Madrid 4 de abril de 1870.—El Alcalde primero, Manuel Maria José de Galdo.

IMPRESA DE D. FRANCISCO PAZ